

# LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y EL PRESTAMO AMORTIZABLE

## Situación que debe ser regularizada

### NECESIDADES INMEDIATAS

En estos últimos tiempos se ha hablado mucho de la situación angustiosa de los empleados públicos cuyos sueldos no se han pagado al nivel de las actuales necesidades de la vida. Hanse producido aumentos en los presupuestos de la mayor parte de las oficinas del Estado, pero estos aumentos, en la mayoría de los casos, no han podido ser concedidos por falta de recursos, y los pocos que se han podido otorgar no pueden darse por completo el angustioso problema que aquella situación implica.

El ingeniero Serrato tuvo la feliz idea de proyectar la construcción de viviendas económicas para los empleados, y este beneficio proyectado está a punto de ser convertido en ley de la Nación, en razón de la entusiasta acogida que ha encontrado en los Poderes Públicos. Indudablemente que esta fórmula, destinada a convertir al funcionario público en propietario de la casa que habita, mediante el aporte de una pequeña suma mensual, ha de contribuir, al paso del tiempo, a mejorar la situación, alivando de paso, un factor importante para resolver el problema general de la vivienda escasa y cara. Pero como quiera que el empleado público tiene, aparte de estas necesidades, que podríamos llamar de "cartera", otras importantes y más inmediatas que atender, por lo que se relacionan con las exigencias habitables del presente, creemos que, sin perjuicio de pensar en otorgar a los funcionarios públicos el aumento de sueldo que sea justo y posible concederlos, y de proporcionarles los medios para adquirir una vivienda propia, es necesario, en primer lugar, ocuparse de dar una mejor y más prudente organización al crédito de que actualmente gozan en la Caja N. de Ahorros y Descuentos, crédito que, a fuerza de ser prodigo, resulta en muchos casos contraproducente para los fines a que se destina.

### OPERACIONES CORRIENTES

La mayor parte de los empleados tiene, en la referida Caja, dos operaciones: una de descuento por los meses de sueldo, y la otra por los meses de sueldo que se adeuda. La primera es amortizada en 20 mensualidades. La primera de estas dos operaciones, no pesa mayormente sobre su haber mensual, porque repentinamente se amortiza en 20 meses, lo que resulta en una suma insignificante por concepto de intereses, a razón de 8 o 10 anual. La segunda, si bien en determinado momento reporta al empleado el beneficio indudable de un adelanto de dinero, como es usual sin solución de continuidad, se traduce en una eterna gabela de relativa importancia, por un aspecto de descuento vitalicio, que implica una tributación continua de intereses superiores en suma al tipo normal de 8 o 10, por las deducciones que la institución hace al devolver los préstamos calculados en los casos de renovación de préstamos.

Un empleado que gana, por ejemplo, \$ 100, tiene opción a un crédito autorizado de \$ 300, amortizado en 20 meses, lo que implica un descuento de \$ 15 por mes. Este descuento puede ser considerado "de por vida" por el empleado que una vez se vio en la necesidad de recurrir a dicho crédito. El empleado tiene, en efecto, esa necesidad, pero la misma es considerable que en la sucesión de préstamos en sus ingresos mensuales, lo obligará a esperar ansioso la oportunidad de poder renovar la operación pendiente, para satisfacer los saldos impagos de su presupuesto; y de ahí el encadenamiento de las operaciones que está condenado a realizar, en cada una de las cuales ha de pagar el tributo de los intereses correspondientes.

### REGULARIZACION QUE SE IMPONE

Creemos francamente que este sistema de crédito no favorece positivamente a los empleados públicos. Es de presumirse, también, que la facilidad ofrecida para renovar indefinidamente tales préstamos, puede dar lugar a que el empleado los renueve en muchos casos en que no se encuentre, por medio una necesidad que justifique y compense las desventajas futuras que aquellos han de aparejarle. Por otra parte, no se podrá negar sinceramente, que nada puede ser más benéfico al funcionario que el recibir íntegramente sus sueldos, y que, en consecuencia, el haber un crédito "de por vida", es lo que sucede con los empleados particulares, quienes no teniendo a mano el recurso del crédito fácil, viven, por regla general, en situación menos angustiada que los funcionarios públicos, que pueden hacer uso de aquel recurso, por partido de los intereses, con intereses agregados, contribuyendo a complicar la vida de los empleados a sueldo, creandoles nuevas y mayores exigencias para el futuro. Sabemos de muchos empleados que, encadenados de antiguo con los préstamos eternamente renovados, claman al cielo por poder salir de una vez por todas, para llegar al momento "decisivo" de su liberación integral, y que, en una fecha cualquiera

### SOLUCIONES POSIBLES

Es necesario, pues, regularizar el crédito de los empleados públicos en forma conveniente y definitiva. Lo ideal sería sufragar todo descuento y toda operación sobre sueldos en la Caja Nacional, transformando a ésta, por ejemplo, en una institución destinada a administrar los haberes de todo el personal de la Administración, con la presidencia de todas las habilitaciones existentes. A la vez, se podría concebir, en este caso, que funcionara como Caja de descuentos, mediante un pequeño descuento hecho mensualmente en los sueldos, para ir formando un fondo de reserva de que podrían disponer los empleados en la oportunidad debida. Pero esta reforma, nos resulta difícil de realizar, dada la gran diversidad de las grandes y pequeñas proporciones que ha llegado a adquirir el capital empleado en préstamos y descuentos. A la Caja Nacional — cuya situación no es muy desahogada — y cuyas ganancias son bien limitadas — tal vez no le fuera fácil, en los momentos actuales, extender los plazos de pago de tales operaciones realizadas. Por otra parte, no entra, por ahora, en nuestro propósito, el proponer una reforma completa del régimen implantado al funcionar, con fines altruistas y moralizadores, la institución que se denominó Monte de Piedad. Apenas si pretendemos que el empleado público pueda liberarse de la considerable suma de sueldos que implica el famoso préstamo a plazos, hecho, una vez, a impulsos de necesidades inmediatas, y renovado después, incesantemente, en razón de la situación frágil que ese mismo préstamo determina.

Para privar a los empleados del derecho a renovar los préstamos, que se han convertido en un medio de salvar sus cuentas atrasadas — es indispensable buscar el modo de que estos préstamos no se produzcan, o cuando menos, que se produzcan en la menor escala posible. Esto puede ser obtenido reduciendo considerablemente los descuentos mensuales que aqueja la operación de los préstamos. Proponemos, a tal objeto, que los préstamos existentes se abonen al interés de 8 o 10. Actualmente se abona al interés de 12 o 15. En consecuencia, el empleado que tiene un préstamo de \$ 100, a pagar en 20 meses, recibe \$ 193.87 y paga \$ 125 mensuales. Páguenle a aquel importe en 100 cuotas, habría que agregarle por concepto de intereses al 8 o 10 anual, la suma de \$ 25. De modo que resultaría \$ 125, con una amortización mensual de \$ 1.25. En consecuencia, el empleado que tiene un préstamo de \$ 100, a pagar en 20 meses, recibe \$ 193.87 y paga \$ 125 mensuales. Páguenle a aquel importe en 100 cuotas, habría que agregarle por concepto de intereses al 8 o 10 anual, la suma de \$ 25. De modo que resultaría \$ 125, con una amortización mensual de \$ 1.25. En consecuencia, el empleado que tiene un préstamo de \$ 100, a pagar en 20 meses, recibe \$ 193.87 y paga \$ 125 mensuales. Páguenle a aquel importe en 100 cuotas, habría que agregarle por concepto de intereses al 8 o 10 anual, la suma de \$ 25. De modo que resultaría \$ 125, con una amortización mensual de \$ 1.25.

Esbozada, así, a grandes rasgos, la manera en que, a nuestro juicio, podría ser regularizada la situación de los empleados públicos con la Caja N. de Ahorros y Descuentos, sólo nos resta agregar que, si no en esta forma, en cualquier otra mejor que se proyecte, aquella situación debe ser regularizada cuanto antes. En ningún país del mundo se otorgan créditos a los empleados públicos en las condiciones inconvenientes que entre nosotros oficialmente ese crédito se concede. El empleado vive aquí con su sueldo eternamente retocado. Es conveniente moralizadora la institución que otorga el crédito a los empleados, pero el pleno de los haberes, dándole amplias facilidades para cumplir los compromisos contractuales. Por lo pronto, esta medida implicaría un efectivo aumento de sueldo, que habría de producirse un beneficio inmediato. Ella traería también aparejada, por otra parte, una mayor facilidad para hacer frente a los adelantos que deseen hacer uno de los ventajosos ofrecidos por el proyecto Serrato para adquirir viviendas económicas.

### PROYECTO DE CONSERVACION

La Presidencia de la República dirigió ayer un mensaje a la Asamblea General, adjuntando el siguiente proyecto de ley:

Artículo 1.º La Presidencia de la República, por medio de la Dirección de Obras Públicas, podrá intervenir en la construcción, conservación, reparación y restauración de la Fortaleza de Santa Teresa.

## Novedades políticas

### Terminación del debate en el Senado

A las cuatro de la tarde del día de ayer se reunieron en las salas del Consejo los señores Batlle y Ordóñez, Feliciano Viera, Ricardo J. Arce, Domingo Arenas y Pedro Cosío para discutir los cambios de impresiones y de ideas respecto a la política futura.

Se esperó media hora al doctor Campisteguy, pero al fin, el señor Cosío recibió una escueta que aquel pidiéndole manifestara que un motivo imprevisto le impedía concurrir a la reunión.

En vista de esto solo se habló durante una media hora más, acordando esperar a que pueda concurrir el doctor Campisteguy para convenir alguna cosa concreta, si hubiese lugar a ello, con relación a la marcha futura del Consejo.

Entre los asuntos de que se habló está el del escrutinio de miembros del Consejo que aún no ha sido terminado por el Senado, debido a que no habían remitido las urnas las Juntas Electorales de Paysandú, Artigas y Treinta y Tres.

Se consideró que sería una grave responsabilidad para el Senado el hecho de que no pudiera constituirse el Consejo el 1.º de Marzo como lo determina la Constitución, y que sería un precedente muy malo para el futuro cuando se trate del escrutinio de una presidencia o de un gobernador.

El Secretario del Consejo, don Vidal Bolo se informó del estado del asunto y manifestó que según las noticias que había en el Senado, los escrutinios de Artigas venían en viaje; los de Rivera se iban a efectuar en el departamento de Maldonado y los de Treinta y Tres en el departamento de Maldonado. Solo de los de Paysandú no se sabe nada.

El Senado debe tomar medidas rápidas y eficaces para que vengan las urnas de Paysandú para que no sea necesario postergar al día de la fecha de constituir el Consejo.

Se habló también del ceremonial que corresponde al acto de incorporación de los nuevos Consejeros. Estos, según la Constitución deben prestar juramento el 1.º de Marzo ante las dos Cámaras y el Consejo reunidos.

### El doctor E. Blanco Acevedo

Ha sido electo por los médicos para el cargo de miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina el doctor Eduardo Blanco Acevedo.

Queremos destacar el hecho como muy significativo, por tratarse del ingreso al más alto cuerpo representativo de la ciencia médica en el país, obtenido por el consenso de sus colegas, quienes mejor que nadie son capaces de apreciar las singulares dotes de ilustración y talento que caracterizan al doctor Blanco.

Su actuación brillante en Francia es notoria y lo acredita a cualquier altísimo nivel de su conocimiento científico y su capacidad de que para obtener la consagración científica en Europa por un elemento de nuestras Facultades, — calificados en relación a la importancia material del país, — es necesario merecerlo dos veces.

Llegado a nuestro país el doctor Blanco, lejos de encasillarse en el egoísmo lucrativo que reserva para exclusivo provecho del ejercicio profesional su vasto saber, adquirió "en intenso estudio" se muestra prodigo en la divulgación de todos los conocimientos que adquirió en la conferencia de hospitales, repartiendo su vida en una parte mucho mayor para los otros que para él mismo, con ese espíritu amplio, que se adhiere, — cuando hay propensión para ello, — en aquellos horizontes también tan amplios de los grandes centros de cultura, donde no hay lugar al tiempo para preocupaciones pequeñas, ni más rivalidad que la de empeñarse todos y cada uno en hacer más bien las cosas.

Al felicitar al eminente compatriota por su merecida elección felicitamos al Consejo de la Facultad de Medicina por el nuevo concurso de ciencia y laboriosidad que aporta el doctor Blanco.

### Aguas corrientes para San Carlos

#### SOLICITUD AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

El vecindario de San Carlos preocupado por las malas condiciones del agua que beben que origina varias enfermedades infecciosas, como la tifoidea, disenteria, etc., ha dirigido una nota firmada por los más selectos de su población concebida en los siguientes términos:

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas, Arquitecto don Humberto Pittamiglio. — Excmo. Señor: Los abajo firmados, vecinos de esta villa, informados por los diarios de la capital que la Dirección de Sanamiento procederá al saneamiento de varias poblaciones del Este, que son nombradas, pero entre las que no se cita la nuestra, alarmados por la injusticia de postergar justamente por ser esta la villa la más perjudicada por la

## El asunto de las tarifas ferroviarias

### Terminación del debate en el Senado

Sesión ayer de tarde, la Cámara de Senadores, presida por el doctor Mendizábal.

Abierto el acto se dio cuenta de los asuntos entrados.

También se dio cuenta de un proyecto de minuta a la Alta Corte de Justicia, propuesto por el doctor Jiménez de Aréchaga, en el cual se pide la intervención de la magistratura en los juicios supletivos.

Cita para justificar su pedido, dos hechos: El de un magistrado que por razones dolosas de orden privado se vio obligado a abandonar temporalmente el país y se vio precisado a renunciar, y de otro, que por una enfermedad ha motivado el alejamiento de sus funciones, y no obstante la comisión confiada a un tercero de su justificación, se nota una completa paralización al ser el juez, con innegable perjuicio para los litigantes y demerito de la justicia.

Concuerda que esos males de la justicia deben y pueden ser remedios y cree que la institución de jueces supletivos sería de una elección muy acertada para el mejoramiento de la administración judicial.

La minuta del doctor Aréchaga fue aprobada por el Senado. Se entra después a la orden del día para proseguir el debate sobre el asunto de las tarifas ferroviarias.

Entonces solicita la palabra el doctor Aréchaga para hacer un breve agregado a su discurso de la sesión anterior.

Observa el mencionado legislador que se ha hecho público que la Empresa del Ferrocarril de la Plata, a nombre de la cual se ha solicitado el conflicto, por lo tanto, cree que hay una esperanza para la reacción del Poder Ejecutivo, por cuanto los jueces no podrán obligar a aquella a designar, si no se sanciona una ley especial que se lo imponga.

En consecuencia, entiende, que ante este nuevo aspecto, el asunto volverá a su situación natural y se podrá dar a la cuestión una solución tal como la desea el Senado, que es a su juicio, la que debe ser.

Habla después el doctor Otero, que había solicitado al palabra al finalizar la sesión anterior. Declara que el discurso del doctor Aréchaga había sido tan completo en la materia, que en realidad poco podría agregarse ya. No obstante, quiere que el Senado se acuerde la importancia, siempre desde el mismo punto de mira de lo que sostiene el Senado.

El primero, sería el que ya trató la vez pasada y que encierra una cuestión constitucional, que es la del derecho que tiene el Estado para intervenir en los servicios públicos, controlando sus precios.

El doctor Otero alude al informe producido por el abogado de la empresa y hace resaltar que en el Senado no se ha dado lugar a la discusión de la ley, sino que se colocaron a la empresa en la situación de una industria privada, con derecho a fijar sus tarifas.

Sigue diciendo que los abogados de la empresa han desconocido los privilegios de que goza aquella, habiéndole equiparado a cualquier almacén, y hasta desconociendo también, que el servicio de ferrocarriles fuera de carácter público. Por su parte, sostiene que ello no es así.

El orador comenta y rebate el informe del fiscal doctor Viera, calificando de curules algunas de sus consideraciones, por el criterio que las sostiene.

Luego el doctor Otero pasa a estudiar las características del contrato-ley de concesión para probar que el alcázar que se hace a favor de la empresa respecto de que esta goza todavía de privilegios y exenciones es infundado. Cita los dos primeros artículos de la concesión, de cuya lectura deduce que está claramente establecidos en ellos, que tanto los privilegios y la exención de la competencia se conceden a la empresa por el término de cuarenta años, plazo que ya ha terminado y por consiguiente, nada puede sostenerse en favor de la teoría que reclama para el Central el derecho de establecer sus tarifas sin control del Estado.

Estudiando el asunto — dice — a la luz de la razón serena y tomando como base los ya citados artículos, cualquier persona que profundice su estudio, llegará honestamente al convencimiento, de que no existe ya, derecho alguno en exclusivo poder de la empresa.

Refiriéndose después, a los estatutos primitivos de la empresa y a los reformados, posteriormente, se extendió en amplias consideraciones respecto a la cláusula de la concesión que establece la ampliación del capital de la empresa, a cifras indefinidas, sin limitación alguna.

Artículo 4.º: Para la liquidación y pago de la garantía de las líneas del F. C. Central del Uruguay, esto es: las Compañías Extensiones Norte y Este y la línea de la frontera a Treinta y Tres, se adoptará como base, a contar desde la fecha de la apertura del servicio público, la primera sección del ramal a Treinta y Tres, la fórmula siguiente aplicada a las cuentas semestrales: Gastos de la línea igual al 45 por ciento de las entradas brutas, más una constante de \$ 85.50 por kilómetro. Esta fórmula se modificará después de los primeros diez años para ajustar el porcentaje de gastos totales a explotación de todas las líneas unidas del F. C. Central del Uruguay, durante estos diez años, y la fórmula que así se establece quedará en vigencia por todo el tiempo de la concesión del F. C. Nordeste.

Por la ley de 31 de Diciembre de 1909, aprobada por el Parlamento ad-referendum que con fecha 18 de Octubre de ese año habian celebrado el P. E. y el representante de las Compañías del Nordeste y Extensiones Norte y Este del F. C. Central del Uruguay, se estableció la siguiente fórmula para determinar los gastos de estas líneas, los efectos de la liquidación y pago de las garantías.

Artículo 4.º: Para la liquidación y pago de la garantía de las líneas del F. C. Central del Uruguay, esto es: las Compañías Extensiones Norte y Este y la línea de la frontera a Treinta y Tres, se adoptará como base, a contar desde la fecha de la apertura del servicio público, la primera sección del ramal a Treinta y Tres, la fórmula siguiente aplicada a las cuentas semestrales: Gastos de la línea igual al 45 por ciento de las entradas brutas, más una constante de \$ 85.50 por kilómetro. Esta fórmula se modificará después de los primeros diez años para ajustar el porcentaje de gastos totales a explotación de todas las líneas unidas del F. C. Central del Uruguay, durante estos diez años, y la fórmula que así se establece quedará en vigencia por todo el tiempo de la concesión del F. C. Nordeste.

Propongo, pues, que se haga saber a la Oficina de Control de Ferrocarriles que el porcentaje promedio de \$ 11.14 o de gastos que corresponden según las tarifas vigentes, debe corresponder a la explotación de estas líneas, a experimentar.

Martin C. Martínez.

## Lo del Hospital Vilardebó

### Representantes llenos de incidencias

Volvio a reunirse ayer la Cámara de Representantes a fin de continuar el debate del proyecto de la Comisión Investigadora en el Hospital Vilardebó.

Abierto el acto por el doctor Sorin se dio cuenta de los asuntos entrados.

### LOS SUELDOS DE LOS PROFESORES LICEALES

Luego, por indicación del señor Amichetti, y previa una breve discusión, se sancionó en primer término y en ambas direcciones, el proyecto del Consejo N. de Administración, que fija sueldos a los profesores liceales de \$ 545.264.37. A raíz de esta modificación, ambos diputados sostienen un diálogo sobre la autenticidad de los datos, que atribuyen al contador de la Asistencia Pública.

Acto continuo, el doctor Bonet, hace uso de la palabra manifestando que el doctor Brin al manifestar que no existen defectos, ha sido mal informado por cuanto según los datos que el posea, y que datan del 2º de febrero de 1919, existían por los conceptos, un déficit de \$ 545.264.37. A raíz de esta modificación, ambos diputados sostienen un diálogo sobre la autenticidad de los datos, que atribuyen al contador de la Asistencia Pública.

El doctor Mayá interviene y da lugar a una carta del contador de la Asistencia en la cual manifiesta que en el "Estado" 1919-20 el superávit fue de \$ 533.354.19, aclarando entonces el doctor Arias que el doctor Bonnet se refería al ejercicio 1918-19 en que existió el déficit. Responde el doctor Bonnet su discurso, declarando que el informe de la Comisión Especial a su juicio constituye una nota injusta al hacer cargos a la Asistencia Pública. Interrumpiéndolo el doctor Mayá para afirmar que en el informe no se formula ninguna cargo a aquella. Se produce un debate de palabras, que sostiene el doctor Bonnet y el señor Antuña, que las responsabilidades de lo que pasa en la Asistencia no pueden extenderse únicamente al Director de la Asistencia Pública.

Agrega el doctor Bonnet, que hace veinte años, cuando era Director del Hospital Vilardebó, las salas ya eran insuficientes para asilar el número de enfermos que reclamaban asistencia. Da a conocer datos sobre el exceso de enfermos que existían en las demás salas de la Asistencia, siendo interrumpido por el doctor Lussich, quien manifiesta que no podía compararse los pabellones de los otros establecimientos con los existentes en el Vilardebó, donde los enfermos pasan y se curan en una situación que reclama una urgente reparación.

Interviene también el doctor Guigliani, quien hace responsable al doctor Mayá de la situación de la Asistencia Pública y a la mayoría del Consejo que se acuerda, en el punto que según el mismo proyecto que no sea del doctor Martinié puede prosperar allí.

Continúa el doctor Bonnet expresando que el doctor Legnani ha sido exagerado en los cargos formulados contra los servicios médicos que se presta en el Hospital Vilardebó. Sostiene que los médicos que se encuentran al frente de las salas del Vilardebó no son como "lo dijo el doctor Legnani" faltos de moralidad, pues parte de los doctores Lengua y Anessa, cuya capacidad nadie puede negar, los demás pabellones de sala son profesores de la Facultad de Medicina, lo que asegura la preparación de dichos facultativos.

Se extiende después en consideraciones para hacer conocer los datos que obran en su poder y que comprueba que no faltan elementos de curación, así como baños, etc. Refiere también, todas las obras realizadas por la Asistencia Pública en los distintos establecimientos que encuentran bajo su dependencia, como así mismo, las mejoras introducidas en todos sus servicios. En lo que se refiere a la campaña, da a conocer igualmente datos sobre los nuevos hospitales instalados.

Entrando a tratar el asunto del Hospital Vilardebó, dice el doctor Bonnet que el primer motivo de la necesidad de solucionar la situación de esa casa de caridad, es el doctor Martinié, no cree el orador que ese problema pueda ser resuelto mejor, por ninguna otra persona, que las dificultades financieras que esa casa sufre.

Sigue diciendo que el doctor Martinié ingresó al Consejo de la Asistencia Pública hace años, y el Parlamento recién sancionó el presupuesto para esa repartición, en 1919.

Al referirse a la construcción de pabellones en la Colonia de Santa Lucia, dice el orador que dentro de cuatro meses, lo que da lugar, a interrumpirlo, por parte de los doctores Mayá, Lussich y López Aguerre, miembros de la Comisión Investigadora, quienes opinan que esos pabellones no podrán estar concluidos en tan breve plazo.

A esta altura se produjo otro debate dialogado entre los doctores Lussich y Brin.

Hizo conocer la opinión del arquitecto Gloria, según la cual los pabellones planeados por la Comisión Investigadora y que según ella costarán unos 3.000 pesos, no podrán construirse por menos de 5.000 pesos cada uno.

El doctor Lussich interrumpe la altura, para decir que el doctor Martinié manifestó a la Comisión que el Consejo no adoptó soluciones provisionales porque el arquitecto Gloria calcula que no podrían hacerse pabellones por menos de \$ 50.000 cada uno. Agregó que si el arquitecto Gloria afirmaba tal cosa y ahora dice que se puede hacer por \$ 5.000, eso es una broma, un error, cosa que padece también al afirmar que costarían \$ 8.000. Dice también, que la Comisión tiene el ofrecimiento del señor Gabriel Terra, que construye en la Escuela de Tiro, los pabellones análogos a los propuestos por la Comisión, de efectuar esas construcciones por el precio de 2.200 cada uno.

## Banco de la República

### UTILIDADES DE LAS SECURSALES

Las utilidades líquidas de las securales del Banco de la República en todo el país, obtenidas en el año 1919, reflejan favorablemente la acción económica que desenvuelve el Banco del Estado por todas las regiones de la campaña. Esos beneficios son el precio de un servicio importante rendido mediante el crédito a la principal industria del comercio.

Se notará de paso la importancia de algunas securales, que — como la del Salto, — ya tiene tal volumen de operaciones comparables al de importantes bancos privados de los que trabajan en la capital.

1 Salto	\$ 285.726.54
2 Melo	" 126.972.24
3 Paysandú	" 81.171.95
4 Mercedes	" 80.337.77
5 Rivera	" 67.545.71
6 Artigas	" 65.545.24
7 Rocha	" 62.305.14
8 Tacuarembó	" 48.433.28
9 Rosario	" 45.114.41
10 San José	" 40.260.77
11 Colonia	" 35.339.67
12 Durruty	" 35.247.32
13 Florida	" 24.594.68
14 Trinidad	" 20.546.52
15 Dolores	" 25.117.60
16 Pudahuel	" 18.723.62
17 S. del Y.	" 15.885.60
18 Benito	" 15.504.17
19 J. B. y O.	" 14.591.74
20 San José	" 14.142.97
21 N. Herrera	" 9.948.76
22 Lascano	" 9.015.90
23 S. Grande	" 7.705.75
24 Santa Rosa	" 4.261.29
25 Camelo	" 2.437.54
26 Canelones	" 2.437.54
Total	\$ 1.159.605.76

### Securales que liquidaron perdidas

27 Maldonado	\$ 13.742.17
28 San Carlos	" 11.066.54
29 Santa Lucia	" 3.768.33
30 Alzua	" 3.712.33
31 Pando	" 3.712.33
32 Nueva Palmira	" 2.221.21
33 Minas	" 984.00
Total	\$ 33.616.88

quedando un margen de \$ 800 para obras de saneamiento.

Continúa el doctor Bonnet, manifestando que el proyecto del doctor Rodríguez Larreta tiene varias disposiciones innecesarias, que la Asistencia Pública sin necesidad de ley alguna ha sujeción a construir pabellones, pudiendo también convertir títulos de deuda. Termina proponiendo una moción exhortando a la Asistencia Pública para que en el menor tiempo posible, termine la construcción de esos pabellones, en la Colonia de Santa Lucia y resuelva también la situación del Hospital Vilardebó, descongestionando ese establecimiento.

Habla luego, el señor Andreoli, quien se muestra partidario de una ley de emergencia, que ponga término a la actual situación calamitosa del Hospital Vilardebó. Agrega que era partidario asimismo, del traslado de los enfermos a la isla de Flores, como lo proponía el doctor Rodríguez Larreta, pero ha cambiado de parecer al conocer las rotas de la Asistencia Pública y del Consejo de Higiene, que hacen observaciones a esa idea, por las dificultades que presentará dicho traslado así como por no ser un local oportuno.

El doctor Rodríguez Larreta no lo cree así y afirma que ese traslado no puede presentar dificultades de ningún orden.

Interrumpe el doctor Lussich para decir que según lo que se pasa en una visita realizada el 1º de Domingo por los miembros del Consejo de Higiene y de la Asistencia Pública al lazareto de la isla de Flores, estuvieron de acuerdo en que no era un local adecuado para trasladar a los enfermos del Hospital Vilardebó.

Por otra parte, agrega el doctor Lussich, la Conferencia Sanitaria Internacional en el país la existencia de un local que puede ser utilizado en un caso dado para combatir epidemias. Si ese local se utiliza con otro fin, se demostrará la poca seriedad del país.

Continúa el señor Andreoli diciendo que es posible tomar la medida aconsejada por el doctor Rodríguez Larreta, debe tomarse y sino otra cualquiera.

Agrega, que la Comisión Especial no ha cumplido su cometido, por cuanto debió decir todo lo que ella sabe respecto a lo que pasa en todos los establecimientos de la Asistencia Pública y del Hospital Vilardebó, para que la Asistencia Pública se decida por los doctores Lussich y Brin.

Dice el señor Andreoli, que se ha dado el caso de darles a los enfermos alimentación en mal estado, como puede comprobarlo con testimonio de varios médicos.

El doctor García Morales le observa que los responsables serán en esos casos los médicos que le dieron esos informes.

Agrega el orador, que la asistencia de enfermos es deficiente, pues cuando existen graves, los médicos no realizan visitas, como lo hacían antes, y que los enfermos no reciben la atención que necesitan, cuando se refieren esos artículos en el extranjero se podrían obtener fuertes economías.

Se produce un largo debate dialogado entre varios diputados, por afirmar el señor Andreoli que el Consejo gastaba indistintamente el dinero en la publicación de cruces rojas de sus actas.

Habiendo pasado la hora reclamatoria, se levantó la sesión. Eran las 13 y 30. Se continuará hoy, a las 15 y 30.















